Breve Reseña Histórica de la Legislación Civil en México, Desde la Epoca Pre-Cortesiana Hasta 1854.

FRANCISCO DE ICAZA DUFOUR

Profesor de Historia del Derecho Mexicano en
el Departamento de Derecho de la UIA.

SI BIEN el Derecho Mexicano es de... "filiación española y, por lo mismo europea...", como afirma don Miguel S. MACEDO¹ hemos querido tratar, aunque sea en forma breve, algunos aspectos del Derecho Pre-Cortesiano, que aunque no podemos considerarlo como antecedente del derecho actualmente en vigor, pues de él "...no podemos señalar ninguna influencia clara ni precisa...",² tampoco podemos negar que el indígena ha influido poderosamente en la formación del Derecho Mexicano, aunque su intervención haya sido "...en la obscuridad, sin él mismo darse cuenta a veces..." como dice el maestro ESQUIVEL Y OBREGÓN.³

Entre los indígenas establecidos en el territorio que hoy ocupa México, al efectuarse la conquista española, los aztecas quienes mayor grado de civilización habían alcanzado, aunque al igual que los demás pueblos bárbaros, entre ellos el Derecho Civil tuvo un menor desarrollo en comparación con el Derecho Público, que por razones obvias alcanzó una mayor evolución. El Derecho Azteca tuvo un carácter eminentemente consuetudinario cuyas principales fuentes eran la costumbre, las sentencias del tlatoani y las de los jueces. El tlatoani como cabeza del régimen despótico azteca era el supremo legislador y órgano judicial de su pueblo, los jueces, como tales y

¹ MACEDO, Miguel S. *Apuntes para la Historia del Derecho Penal Mexicano*. Editorial Cultura, México, 1931, pág. 13.

² MACEDO, Miguel S. *Op. cit.*, pág. 13.

³ ESQUIVEL Y OBREGÓN, Toribio. *Apuntes para la Historia del Derecho en México*, Editorial Polis, México, 1937, Tomo I, pág. 276.

como legisladores, ejercían sus funciones por delegación real y todos ellos al fallar un negocio iban formando una especie de jurisprudencia que se convertía en la norma obligatoria para posteriores casos. Estos fallos o sentencias normalmente no hacían más que sancionar las costumbres y los sentimientos del pueblo, de allí que no encontremos entre los aztecas, ningún antecedente legislativo.

Consumada la conquista y establecida la cultura hispana, algunos autores recopilaron normas consuetudinarias y las ordenaron en forma de leyes escritas, tal hicieron Fernando de Alva Ixtlixóchitl, descendiente de la casa real de Texcoco, que publicó una colección de leyes atribuidas a su abuelo Netzahualcóyotl y que junto con las que el historiador don Mariano VEYTIA recopiló de diversos autores indígenas, también atribuidas a Netzahualcóyotl, dan un total de 38 leyes. Asimismo, Fray Bartolomé de las Casas en su Historia Apologética de la Destrucción de las Indias, publicó un conjunto de 58 leyes, conocidas con el nombre del "Libro de Oro" y cuya traducción al castellano atribuye a Fray Andrés de Alcobiz.

De la colección de leyes, publicada por Alva Ixtlixóchitl en sus Obras Históricas, solamente cuatro tienen carácter civil, éstas son:

16. Que si algún principal Mayorazgo fuese desbaratado o travieso, o si entre dos de estos tales hubiese alguna diferencia sobre tierras u otras cosas, el que no quisiese estarse quedo con la averiguación que entre ellos se hiciese, por ser soberbio y mal mirado, le fuesen quitados sus bienes y el Mayorazgo y fuese puesto en depósito en una persona que diese cuenta de ello para el tiempo que le fuese pedida, del cual Mayorazgo estuviese desposeído todo el tiempo que la voluntad del Señor fuese.

17. Que si alguna persona fuese casada y la mujer se quejase del marido y quisiese descasarse, que en tal caso los hijos que tuviese en ella el marido, los tomase, y los bienes fuesen perdidos por iguales partes, tanto el uno como el otro; entiéndese, siendo culpable el marido.

19. Que si alguna persona se vendiese por su propia autoridad, lo pudiese hacer; y que si se vendiese dos veces, que el primer dueño a quien fue vendido lo llevase, y el segundo perdiese el precio que había dado por él.

20. Que si alguna persona vendía dos veces alguna tierra, el primer comprador quedase con ella, y el segundo perdiese lo que dio por ella, y el vendedor fuese castigado.

De la colección de don Mariano VEYTIA publicada en su obra intitulada *Historia Antigua de México*, tienen carácter civil las siguientes:

16. Al hijo que levantara la mano para su padre o madre, y de algún modo les injuriase, pena de muerte y exheredado, para que sus hijos, si los tuviese, no pudiesen suceder en los bienes de los abuelos.

17. Que asimismo pudiese el padre exheredar al hijo que fuese cobarde, cruel, o desperdiciado.

18. Que el marido pudiese repudiar a la mujer floja y descuidada en los ministerios de su casa, o si fuese inquieta o pleitista, y asimismo pudiese ella separarse del marido.

Del "Libro de Oro" solamente la ley 9 es de materia civil, y en ella se dispone que "si algún esclavo se vende y se huye y se vende a otra persona, pareciendo se vuelve a su dueño, y pierde lo que dio por él".⁴

Una vez consumada la conquista de la Gran Tenochtitlan por Hernán Cortés, el territorio de lo que fuera la Nueva España quedó incorporado a la Corona de Castilla, pues a pesar del matrimonio de Fernando de Aragón con Isabel de Castilla, los reinos peninsulares conservaron, cada uno, su propia estructura política, jurídica y administrativa y en virtud de que los descubrimientos y conquistas de las llamadas Indias Occidentales fueron patrocinados por el Reino de Castilla, aquellos territorios se incorporaron a este Reino y en consecuencia fueron sus leyes las que tuvieron vigencia en las vastas tierras de América.

La legislación vigente en la Nueva España podemos dividirla en tres grandes grupos:

A) Leyes vigentes en forma exclusiva en este Virreynato. Dentro de este grupo debemos hacer especial mención a las primeras leyes que tuvieron vigencia en esta Nueva España, debidas al genio de su conquistador, Hernán Cortés, éstas fueron: la Carta de Regimiento para el Municipio de la

⁴ El texto de estas leyes fue tomado de la obra de J. KOHLER *El Derecho de los Aztecas*, publicada en la Revista Jurídica de la Escuela Libre de Derecho, México, 1924. Aunque también pueden verse en las siguientes obras:

ALVA IXTLIXOCHITL, Fernando. *Obras Históricas*. Publicadas y anotadas por don Alfredo CHAVERO. México, 1891, Tomo I, pág. 237.

VEYTIA, Mariano. *Historia Antigua de México*. México, 1836, Tomo III, pág. 421.

OROZCO Y BERRA, Manuel. *Historia Antigua y de la Conquista de México*. Tomo I, pág. 269.

CASAS, Bartolomé de las. *Los indios de México y Nueva España*. Antología. Editorial Porrúa, México, 1966, pág. 139.

Villa Rica de la Veracruz, primera fundación democrática en la América Continental, de 10 de julio de 1519; las Ordenanzas Militares, promulgadas en Tlaxcala el 22 de diciembre de 1520 y las Ordenanzas de 1524 para el municipio de la Ciudad de México, las que estuvieron inéditas hasta que el eminente historiador don Lucas Alamán las copió del archivo del Duque de Terranova y Monteleone y por primera vez las publicó en sus *Disertaciones*.⁵

La legislación del Virreynato estuvo formada por un sinnúmero de Reales Cédulas, Ordenanzas, etc., y principalmente los llamados Autos Acordados del Consejo, los cuales emanaban del Real Acuerdo, que constituía un verdadero cuerpo legislativo integrado por el Virrey y los miembros de la Real Audiencia de México. Estas normas fueron objeto de diversas recopilaciones, de las cuales son las principales:

Las "Ordenanzas y compilación de leyes hechas por el muy ilustre señor don Antonio de Mendoza, visorrey y gobernador de esta Nueva España y presidente de la Audiencia Real que en ella reside y por los señores de la dicha Audiencia, para la buena gobernación y estilo de los oficiales de ella", publicada el año de 1548.⁶

El año de 1563 y como consecuencia de la comisión real dada al Virrey don Luis de Velasco, para que proveyese la recopilación de cédulas dadas a la Audiencia de México, se publicaron las "Provisiones, cédulas, instrucciones de su Majestad; ordenanzas de difuntos y audiencias para la buena expedición de los negocios y administración de justicia y gobernación de los indios", elaboradas por el Oidor Don Vasco de Puga y conocidas vulgarmente con el nombre de "Cedulario de Puga".⁷

Con el transcurso del tiempo el "Cedulario de Puga" se hizo insuficiente y se hizo indispensable llevar a cabo una nueva recopilación la cual encomendó el Arzobispo-Virrey Fray Payo Enríquez de Ribera, al Oidor de la Audiencia de México don Francisco Montemayor y Cuenca la cual se publicó el año de 1678, con el nombre de "Sumarios de las cédulas, órdenes y provisiones reales que se han despachado por su Majestad para la Nueva España y otras partes; especialmente desde el año de mil seiscientos vein-

⁵ ALAMÁN, Lucas. *Disertaciones sobre la Historia de la República Mexicana*. México, 1844, Tomo I, Apéndice II, Págs. 105 a 117. También puede verse en los apuntes mimeográficos de la cátedra de Historia del Derecho Patrio impartida por el Dr. don Javier de CARAVANTES Y ANAYA.

⁶ Estas Ordenanzas fueron reproducidas en forma facsimilar en la "Colección de Incunables Americanos". Madrid, 1945, Tomo V.

⁷ Edición original de 23 de noviembre de 1563. Reproducción facsimilar en "Colección de Incunables Americanos". Volumen III.

tiocho, en que se imprimieron los cuatro libros del primer tomo de la Recopilación de Leyes de las Indias, hasta el año de mil seiscientos y setenta y siete. Con algunos títulos de las materias que nuevamente se añaden; y los autos acordados de su Real Audiencia, y algunas Ordenanzas del Gobierno, que juntó y dispuso el Doctor D. Juan Francisco de Montemayor y Córdoba de Cuenca, Gobernador y Capitán General que fue de la Isla Española, Presidente de su Real Audiencia y Chancillería, y Oidor de la de esta Nueva España, y Consultor propietario del S. Oficio de la Inquisición”.⁸

El año de 1787, apareció en Nueva España una nueva obra de recopilación formada por el ilustre jurisconsulto, Oidor de la Audiencia de México don Eusebio Ventura Beleña. Esta obra, quizá la más famosa de las que se hicieron en su género durante el Virreynato, está dedicada al Virrey Conde de Gálvez y fue publicada con el nombre de “Recopilación Sumaria de los Autos Acordados de la Real Audiencia y Sala del Crimen de esta Nueva España y Provincias de su superior Gobierno; de varias Reales Cédulas y Ordenes que después de publicada la Recopilación de Indias han podido recogerse así de las dirigidas a la misma Audiencia y Gobierno como de algunas otras que por sus notables decisiones convendrá no ignorar”. Esta obra es conocida vulgarmente con el nombre de “Autos Acordados de Montemayor y Beleña”, en virtud de que el autor reimprime en su recopilación parte de la de Montemayor, citada anteriormente.⁹

La obra de Beleña tuvo una enorme difusión antes y después de la Independencia, pues es de tal forma autorizada que “...en los tribunales y entre los jurisconsultos ocupa un lugar de tal manera distinguido en muchos puntos de práctica y de estilo en el Foro, que hasta es preferida a las demás Colecciones tratándose de los procesos civiles y criminales, en materia de posesión momentánea y en otros casos en que su autoridad es decisiva”.¹⁰

B) La Legislación de Indias, vigente en toda la América Hispana “...apoyada en la información directa de los hechos, e inspirada en fines de alta especulación moral y teológica...”¹¹

Tiene para nosotros una importancia de primer orden, pues con ella se inicia en realidad la historia de nuestro Derecho, el Derecho Español y el Indígena son tan sólo antecedentes, mientras que la Legislación Indiana fue

⁸ Edición original impresa por la “Oficina Tipográfica de la Viuda de Bernardo Calderón”. México, 1678.

⁹ Edición original impresa por Felipe ZÚÑIGA Y ONTIVEROS. México, 1787.

¹⁰ MERCADO, Florentino. *Libro de los Códigos*. Imprenta de Vicente G. Torres. México, 1857, pág. 620.

¹¹ ESQUIVEL Y OBRECÓN, Toribio. *Op. cit.*, Tomo I, pág. 276.

la primera dada en especial para estas tierras mestizas, ni hispanas, ni indias.

Lo maravilloso de la empresa española en Indias fue el legalismo que normó sus descubrimientos, conquistas y colonizaciones, que se manifestó aún antes de que se tuviera la certeza sobre la existencia de un nuevo Continente, en las Capitulaciones de Santa Fe, celebradas entre los Reyes Católicos y Colón y en las cuales se sentaban las bases jurídico-administrativas de aquellas tierras.

Ante la imposibilidad de trasplantar en su integridad el Derecho de Castilla a las Indias Occidentales, por las condiciones sociales, económicas y políticas que presentaban aquellas Nuevas tierras, tan distintas a las que existían en la Península, los monarcas españoles se vieron en la necesidad de expedir leyes que se ajustasen a la realidad americana, siguiendo en ello los principios que expusiera el ilustre Obispo de Sevilla San Isidoro, cuando decía que no era posible dar una ley uniforme a todos los humanos ya que cada provincia las requería distintas a consecuencia de sus diversos climas, habitantes y lugares. Ese conjunto de normas dadas en especial para la América, es el que integra la llamada "Legislación Indiana", que fue objeto de diversas recopilaciones.

La aparición de esta nueva legislación, fue sin duda el fenómeno más destacado de la época en el campo del Derecho, sus normas eminentemente casuistas a consecuencia de la falta de experiencia del legislador ante las situaciones totalmente nuevas que se le planteaban, eran dadas para resolver casos concretos, por lo que con frecuencia habían de ser rectificadas e inclusive muchas de ellas se contradecían, pues lo que se buscaba, ante todo, era la perfecta adecuación de la ley a la realidad socio-económica de las nuevas tierras, característica esencial del nuevo Derecho Indiano.

La primera recopilación sobre leyes de Indias es la llamada "Copulata de Leyes de Indias", realizada por el secretario de la Visita del Consejo y primer Cronista Oficial de Indias don Juan López de Velasco, que contiene todas las disposiciones promulgadas desde el descubrimiento de América hasta el año de 1569, la cual sirvió de base a la obra de don Juan de Ovando, de la cual sólo se publicó una parte bajo el nombre de "Ordenanzas Reales del Consejo de las Indias", aprobadas por el Rey el 24 de septiembre de 1571, e impresas en Madrid catorce años después.¹²

El año de 1574, se publicó una nueva recopilación elaborada por don Alonso de Zorita, publicada con el nombre de "Leyes y Ordenanzas reales

¹² GONZÁLEZ DE COSSÍO, Francisco. *Apuntes para la Historia del Jus Puniendi en México*. México, 1963, págs. 86-87.

de las Indias del mar océano, por las cuales primeramente se han de librar todos los pleitos civiles y criminales de aquellas partes, y por lo que por ellas no estuviere determinado se ha de librar por las leyes y ordenanzas de los reinos de Castilla".¹³

En tercer lugar tenemos la recopilación elaborada el año de 1596 por el oficial mayor de la Escribanía de Cámara de Justicia del Consejo de Indias, Don Diego de Encinas, publicada en cuatro tomos, que por no tener la distribución adecuada, no se juzgó a propósito, aunque fue de gran utilidad para trabajos posteriores.

Don Francisco González de Cossío alude en su obra¹⁴ una nueva recopilación cuyo contenido se desconoce, realizada en 1603 por don Diego de Zorrilla, la cual probablemente sirvió de base a las obras de Aguiar y Pinelo.

Siendo presidente del Consejo de Indias el Conde de Lemus el año de 1608, se encomendó a Hernando Villagómez y Rodrigo de Aguiar y Acuña¹⁵ la formación de una recopilación de leyes de Indias, que por diversas circunstancias no pudieron terminar. Fue hasta 1628 que don Rodrigo de Aguiar, con la asistencia de don Antonio de León Pinelo publicó los llamados "Sumarios de la Recopilación general de leyes de Indias", que abarca los años de 1492 a 1628.

Ante la inminente necesidad de una obra completa de recopilación el Consejo encargó nuevamente a don Antonio de León para que la realizara y una vez terminada se sometió a la consideración de ilustres personajes como don Juan de Palafox y Mendoza, don Juan de Solórzano Pereyra y don Juan de Santelices, la cual nunca llegó a publicarse, aunque sus trabajos sirvieron de base para la magna obra sancionada por el Rey Carlos II, el 18 de mayo de 1680, con el nombre de "Recopilación de Leyes de los Reynos de Indias", en cuya formación intervinieron don Fernando Jiménez Paniagua, don Fernando de Guevara Altamirano, don Antonio de Monsalve, don Miguel de Luna y Arellano y don Gil de Castejón.

La obra está compuesta por nueve libros, divididos en 218 títulos, los que a su vez contienen cerca de seis mil cuatrocientas leyes. El primer libro se refiere a materia eclesiástica; el segundo a la legislación general, en él se trata del Consejo de Indias, las Audiencias y Chancillerías, etc.; el tercer libro regula lo referente a los altos funcionarios del gobierno español en América como virreyes, gobernadores, etc.; en el cuarto se trata todo lo relativo a descubrimientos, población, colonización y formación de villas y

¹³ GONZÁLEZ DE COSSÍO, Francisco. *Op. cit.*, pág. 87.

¹⁴ GONZÁLEZ DE COSSÍO, Francisco. *Op. cit.*, pág. 89.

¹⁵ MERCADO, Florentino. *Op. cit.*, pág. 560.

ciudades; el quinto a los términos, pleitos, sentencias, recursos, escribanos, notarios, etc.; el sexto disposiciones referentes a los indios, encomiendas, pensiones, confirmaciones, rentas y trabajo; séptimo a los delitos, investigaciones, penas, cárceles, etc.; el octavo a materia hacendaria y el noveno a la Casa de Contratación, la Real Audiencia, armada, navegación, flotas y comercio marítimo.

Las leyes no incluidas en la Recopilación no fueron derogadas sino que siguieron vigentes, pero sólo en aquello en que no fuesen contrarias a las recopiladas. Este fue el sistema seguido por España en toda su legislación, desde los más remotos tiempos de la monarquía visigoda hasta mediados del siglo XIX, en que aparecieron los primeros códigos; solamente se derogaban las partes de la ley anterior en lo que se opusiera a la nueva, pero lo demás quedaba en vigor, es por estas razones que encontrábamos leyes antiquísimas vigentes y la confusión en materia legislativa era inmensa.

C) Legislación Castellana vigente en forma supletoria en la América Española, pues a falta de disposición expresa en las Leyes de Indias debían aplicarse las de Castilla, sin embargo, fue preponderante el papel de esta legislación en el ámbito del Derecho Privado.

Si bien Hernán Cortés normó su conducta y organizó las tierras por él conquistadas conforme a la tradición jurídica hispana, no fue sino hasta 1530 que Carlos I en las Ordenanzas de Audiencia mandó "Que se guarden las Leyes de Castilla, en lo que no estuviere decidido por las de Indias", conforme al orden de prelación establecido en las Leyes de Toro, esta disposición la encontramos confirmada en la Recopilación de Leyes de Indias (Ley 2, Tit. 1., Lib. II).

La ley de Toro aludida en el párrafo que precede, es la primera de las 83 leyes sancionadas el año de 1505 por las Cortes celebradas en la ciudad de Toro. En dicha ley se reproduce, aunque con algunas modificaciones de Ley 1, Tit. 28 del Ordenamiento de Alcalá, promulgado en 1348 por Alfonso XI de Castilla en el que por vez primera se estableció el orden de prelación de las fuentes de Derecho Castellano. Conforme a la Ley I de Toro, el orden era el siguiente: 1. Leyes de Toro; 2. Ordenamiento de Alcalá; 3. Fueros Municipales de Castilla;¹⁶ 4. Fuero Real¹⁷ si se probaba su uso; y 5. Las

¹⁶ Entre los fueros municipales de Castilla cabe hacer especial mención del Liber Judicum, obra cumbre de la legislación gótica, que hasta la invasión árabe fue ley fundamental de la monarquía visigoda y lo encontramos como fuero local de diversos municipios castellanos y del Reino de León, en el período de la Reconquista.

Bajo el reinado de Fernando III "El Santo", fue traducido el Liber Judicum al romance y se le conoció con los nombres de Fuero Juzgo o Libro de los Jueces. En el empeño de este gran Rey por unificar la legislación castellana lo dio como fuero

Siete Partidas.¹⁸ Este orden de prelación lo encontramos sancionado más tarde en la Nueva Recopilación de Castilla (Ley 3, Tit. 1 Lib. 2), promulgada bajo el reinado de Felipe II en 1567 y en la Novísima Recopilación de las Leyes de España (Ley 3, Tit. 2, Lib. 3), promulgada por Carlos IV, el año de 1805.

Sin embargo, no todas las Leyes de Castilla obtuvieron vigencia supletoria en Indias, pues la Ley 40, Tit. I, Lib. II de la citada Recopilación de las Leyes Indias, establecía “que ninguna pragmática de las que se promulgaren en estos Reinos (Castilla), si por especial Cédula nuestra, despachadas por el Consejo de Indias no se mandare guardar a aquellas provincias (América)”.

En cuanto a la materia civil estuvo regulada fundamentalmente por la legislación castellana, aunque modificada por algunos preceptos de la Legislación Indiana, dados con el principal objeto de adaptar a los indígenas al nuevo régimen jurídico y protegerlos de los posibles abusos de los europeos, pues “Cuando los gobernantes españoles se creyeron en el caso de legislar sobre la familia o sobre la sucesión mortis causa, sobre el derecho de propiedad o sobre el derecho de obligaciones, las normas que al efecto dictaron, no hicieron otra cosa que regular las nuevas situaciones de hecho, sin alterar, fundamentalmente, la doctrina jurídica tradicional del derecho castellano”.¹⁹

municipal a la ciudad de Córdoba y mandó el año de 1222 que todos los pleitos se librasen conforme a las normas del Fuero Juzgo. De esta obra se han hecho múltiples ediciones, siendo la mejor, en opinión de don Miguel S. MACEDO, la edición bilingüe (Latín y Castellano) de la Real Academia de la Lengua Española, impresa en Madrid el año de 1851.

¹⁷ En el empeño por unificar la legislación de Castilla, Don Alfonso X “El Sabio” publicó el llamado “Fuero Real de España”, también conocido como Fuero de las Leyes o Fuero de la Corte (entre otros), aproximadamente entre 1252 y 1255, y para facilitar su implantación dando como fuero municipal a diversas ciudades como Madrid, Soria, Béjar y Sahagún.

¹⁸ El Código de las Siete Partidas promulgado también por Alfonso X, es la obra más importante de su época en el Occidente europeo, fueron redactadas probablemente en Murcia entre los años de 1256 y 1263 y en su redacción participaron el maestro Jacobo, Fernando Martínez, Arcediano de Zamora y el maestro Roldán. Sus fuentes principales son el Corpus Juris Civilis, las Decretales de Gregorio IX, el Libri Feudorum y los Roolos de Oleron. Esta obra alcanzó fuerza legal en forma supletoria hasta 1348 en el Ordenamiento de Alcalá, aunque ya con anterioridad se puede demostrar su alegación en los tribunales.

¹⁹ OTS-CAFDEQUÍ, José María. *Manual de Historia del Derecho Español en las Indias y del Derecho propiamente Indiano*. Instituto de Historia del Derecho Argentino. Buenos Aires, 1943, Tomo I, pág. 90.

La médula del Derecho Civil del Virreynato fueron sin duda las Siete Partidas, obra cumbre del Derecho Castellano y de todo el Occidente europeo, que encontró en las Indias Occidentales una difusión extraordinaria y una vigencia más efectiva, sin duda superior a la que tuvo en Castilla misma, ya que los tribunales americanos no encontraron la resistencia que hubo de vencerse en la Península, donde sus habitantes tenían gran apego a sus fueros y rechazaron el Código Alfonsino por sentirlo extraño a su tradición jurídica, mientras que América, carente de fueros, aceptó sin problemas su aplicación.

Cabe advertir que en el período virreynal, junto a esta legislación subsistieron algunos usos y costumbres indígenas, pues la Recopilación de Leyes de Indias establecía “que las Leyes y Buenas costumbres que antiguamente tenían los indios para su buen Gobierno y Policía, y sus usos y costumbres observadas y guardadas después que son cristianos, y que no se encuentren con nuestra sagrada religión, ni con las leyes de este libro y las que han hecho y ordenado de nuevo, se guarden y ejecuten” (Ley 4, Tit. I, Lib. II).²⁰ Sin embargo, en materia civil el derecho hispano vino a desplazar prácticamente las costumbres indígenas tanto por su mayor perfección como por introducir instituciones que les beneficiaban como era la propiedad privada, la materia sucesoria, el derecho de las obligaciones, etc., hasta entonces casi desconocidas para ellos.

Consumada la Independencia de México el año de 1821 por don Agustín de Iturbide, siguió vigente la antigua legislación española, “que necesariamente debió seguir rigiendo, porque la Nación no estaba preparada para sustituirla por otra adecuada a la nueva forma de Gobierno y las instituciones políticas bajo las cuales debía ser regida”, según expone Manuel Mateos Alarcón en la Evolución del Derecho Civil Mexicano. Lógicamente en orden de prelación de leyes fue modificado de acuerdo con las necesidades de la Nueva Nación, de la siguiente forma:²¹

- 1o. En los Estados, las leyes de los congresos que cada uno ha tenido; por el Distrito y Territorios, las Leyes Generales.
- 2o. Decretos de las Cortes de España y Reales Cédulas.
- 3o. La Ordenanza de Artillería.
- 4o. La Ordenanza de Ingenieros.

²⁰ Esta disposición permitió se conservaran algunos usos y costumbres indígenas, que han llegado hasta nosotros. Si en otras materias se pueden encontrar antecedentes en el Derecho Indígena, no sucede lo mismo en la legislación civil de filiación claramente europea.

²¹ MERCADO, Florentino. *Op. cit.*, pág. 620.

- 5o. La Ordenanza General de Correos.
- 6o. Las Ordenanzas Generales de Marina.
- 7o. La Ordenanza de Intendentes.
- 8o. La Ordenanza de Minería.
- 9o. La Ordenanza Militar.
- 10o. La Ordenanza de Milicia Activa o Provincial.
- 11o. Las Ordenanzas de Bilbao.
- 12o. Las Leyes de Indias.
- 13o. La Novísima Recopilación de Castilla.
- 14o. La Nueva Recopilación de Castilla.
- 15o. Las Leyes de Toro.
- 16o. Las Ordenanzas Reales de Castilla.
- 17o. El Ordenamiento de Alcalá de Henares.
- 18o. El Fuero Real.
- 19o. El Fuero Juzgo.
- 20o. Las Siete Partidas.
- 21o. El Derecho Canónico.
- 22o. El Derecho Romano.

La redacción de códigos por materias, que consignaran de forma clara las leyes eran una necesidad que se venía sintiendo muchos años antes de independizarnos de España, pues como apuntaba don Juan N. RODRÍGUEZ DE SAN MIGUEL. “No faltan entre nuestras leyes las necesarias a reprimir todo abuso, a alejar todo mal ni a promover todo bien; pero no se tienen presentes; o aunque se tengan no se cumplen...”,²² ya que se encontraban dispersas en multitud de códigos y leyes sueltas, muchas de ellas ya derogadas y dispersas, lo que hacía prácticamente imposible su conocimiento.

El germen del movimiento codificador lo encontramos en las Cortes de Cádiz, que por influencia francesa, ya habían dispuesto la formación de códigos uniformes y por materias que rigieran en todo el inmenso Imperio Español, pero la reacción absoluta de Fernando VII y las independencias americanas suspendieron las disposiciones de las Cortes, pero la idea se conservó para fructificar en las nuevas naciones americanas.

Desde los albores de nuestra vida independiente muchas fueron las comisiones y los decretos promulgados para elaborar códigos, pero la inestabilidad política y las guerras casi siempre impidieron que se llegaran a actualizar aquellos deseos. Por lo general en los primeros años de independencia los legisladores se limitaron a expedir “. . .leyes políticas de todas

²² GONZÁLEZ CASTRO, Vicente. *Redacción del Código Civil de México*. Impreso por Mariano Meléndez y Muñoz, Guadalajara, 1839, pág. VIII.

clases —amnistías e indultos, honores, destierros, proscripciones, etc.—, especialmente personales y de circunstancias, o bien destinadas a satisfacer necesidades administrativas que no admitían demora, como las de administración hacendaria, impuestos, préstamos voluntarios o forzosos, organización fiscal, etc., las de organización del ejército y administración militar, y las que exigían la independencia y la nueva constitución del país, como fueron la división territorial, la administración de justicia federal y demás materias análogas; predominando y anteponiéndose a todo las necesidades y las consideraciones políticas, al grado de que en sus primeros períodos la historia del derecho mexicano se confunde con la historia política nacional”.²³

Las luchas entre conservadores y liberales que abarcaron varias décadas de nuestra vida independiente, tuvieron repercusiones en todos los aspectos de la vida nacional, se trataba del enfrentamiento de dos órdenes radicalmente opuestos, de dos grupos que luchaban por “principios irreconciliables”, como afirmaba el General Miramón.²⁴

Para la facción liberal había que romper con todos los viejos moldes heredados de España, transformar a la sociedad misma²⁵ en aras del progreso, para lo cual las instituciones y la legislación jugaban un papel esencial ya que les consideraban instrumentos necesarios “...para impulsar el progreso...”²⁶ Mientras que el grupo conservador propugnaba por mantener las leyes e instituciones heredadas del Virreynato, ajustándolas a las nuevas necesidades desechando las que no lo fueran y oponiéndose a ciertas innovaciones liberales, ya que consideraban que “...los males de México se derivan de que nuestros primeros legisladores dictaron normas que no coincidían con la realidad imperante”.²⁷ según razonamiento de don Lucas Alamán en el periódico *El Tiempo*, en 1846.

Como consecuencia lógica, las ideas acerca de una nueva legislación civil, no podían ser ajenas a la ideología política de una y otra facción. Los liberales pugnaban por adoptar el Código de Napoleón a las necesidades de México y los conservadores sostenían la tesis de sistematizar la antigua legislación hispana en modernos códigos y en cuanto al civil decía RODRÍGUEZ DE SAN MIGUEL “...que tuviese por base las sapientísimas leyes de

²³ MACEDO, Miguel S. *Op. cit.*, pág. 203.

²⁴ O’GORMAN, Edmundo. *Supervivencia Política Novo-Hispana*. Fundación Cultural de Condumex, México, 1969.

²⁵ O’GORMAN, Edmundo. *Op. cit.*, pág. 57.

²⁶ REYES HERÓLES, Jesús. *El Liberalismo Mexicano*. Universidad Nacional de México, México, 1958, Tomo II, pág. X.

²⁷ REYES HERÓLES, Jesús. *Op. cit.*, Tomo II, pág. X.

Partida y Recopilación, aprovechando de ellas lo útil, y desechando lo que no lo es; convirtiendo en legislación positiva las legítimas costumbres, dando al olvido las instituciones que no tienen por objeto las necesidades de nuestra sociedad, haciendo que cesen las controversias por la resolución de puntos cuya indecisión ha sido tan favorable a la iniquidad; y determinando en fin cuáles son las partes del antiguo derecho que no tienen ya vigor y cuáles quedan subsistentes aún. De otra suerte, si la incertidumbre de nuestros códigos es hoy un mal, su nueva formación en lo absoluto podría ser completa ruina... ”²⁸

Desde luego el Partido Conservador no dejaba de reconocer los grandes méritos del legislador francés, así González Castro alababa "...al método que adoptaron los sabios autores de los códigos franceses, como que ha merecido justamente la aprobación de los mejores juriconsultos".²⁹ Y RODRÍGUEZ DE SAN MIGUEL aún equipara en sus Pandectas "...la legislación francesa a la romana..."³⁰

Sin embargo, consideramos que la divergencia esencial entre uno y otro grupo, con especial significación para las leyes civiles, era la bandera política del liberalismo que alegaba su supremacía de la autoridad civil y la separación entre Iglesia y Estado, así José María Luis Mora clamaba por la supresión de los fueros eclesiásticos, de las instituciones monásticas, "...y de todas las leyes que atribuyen al Clero el conocimiento de los negocios civiles, como el contrato de matrimonio, etc".³¹ Mientras que los conservadores defendían los privilegios de la Iglesia y dejaban al Clero la regulación de ciertas materias civiles, principalmente lo que se refiere al derecho de familia.

No obstante de que ambas facciones eran conscientes de la necesidad de elaborar una codificación, el espíritu de partido era más fuerte que cualquier otro género de consideraciones, así a la caída de Santa Anna en 1854, el nuevo gobierno abrogó el primer código de Comercio mexicano, conocido como Código Lares, en homenaje a su ilustre redactor don Teodosio LARES, que era ya un gran avance en la materia.³² Gómez Farías

²⁸ GONZÁLEZ CASTRO, Vicente. *Op. cit.*, pág. X.

²⁹ GONZÁLEZ CASTRO, Vicente. *Op. cit.*, pág. VII.

³⁰ MERCADO, Florentino. *Op. cit.*, pág. 93.

³¹ REYES HEROLÉS, Jesús. *Op. cit.*, pág. 275.

³² Sobre la abrogación o derogación del Código Lares existe interesante discusión, que no abordamos por no ser materia de nuestro estudio. Véanse: Jacinto PALLARES, *Derecho Mercantil Mexicano*, núm. 140, pág. 261; Felipe de J. TENA, *Derecho Mercantil Mexicano*, Tomo I, núm. 26, pág. 61 y Roberto L. MANTILLA MOLINA, *Derecho Mercantil*, núm. 24, pág. 15.

clamaba en contra de esta situación en su discurso de 10. de abril de 1833, al prestar juramento como Vicepresidente de la República diciendo “La administración de Justicia se halla por desgracia, en un estado lamentable, y de este grave mal se resentirá nuestra sociedad, mientras dependa aquélla en gran parte de las leyes antiguas y modernas, inaplicables unas, y otras de difícil aplicación en nuestras instituciones; mientras nuestros códigos cumulosos se compongan de leyes dadas para una monarquía absoluta y para una monarquía moderada, para una colonia, y para una nación independiente; para un gobierno central y para una república federativa. Este caos de legislación da lugar fácilmente al espíritu de embrollo, eterniza los procesos y confunde la justicia. Es, pues, de suma necesidad la reforma de este ramo, no por leyes aisladas, sino por códigos completos. La empresa es ardua, pero es menester arrostrarla; dése principio a ella, aunque se deje a otros la gloria de acabarla”.³³

Los intentos codificadores se remontan a las postrimerías del Virreynato y consumada la Independencia, bajo el Imperio se constituyeron las primeras comisiones para tales efectos, que no llegaron a su fin por la caída de don Agustín de Iturbide.

Al establecerse en México el sistema republicano encontramos establecido en el Estado de Oaxaca el Instituto Civil de Artes y Ciencias, creado en 1826 por la Legislatura del Estado y que constituía el principal foco de la ideología liberal en la República bajo la dirección de Fray Francisco Aparicio. En este Instituto realizó los estudios para obtener el título de licenciado e impartió la cátedra de Derecho Civil Benito Juárez, quien dentro del grupo liberal fue sin duda el más preocupado por la elaboración de códigos.

Al amparo de la Constitución de 1824, se expidió en Oaxaca el primer Código Civil del México independiente, los años de 1827 a 1829 de corte netamente liberal e inspirado en el Código Napoleón. La inestabilidad política hizo que su vigencia fuera efímera, ya que probablemente quedó abrogado al entrar en vigor la Constitución de 1836, que convertía a la Nación en República centralista.

Con seguridad debieron ser nombradas múltiples comisiones para la elaboración de códigos, ya que don Lucas Alamán en su historia de México, argumenta que se había gastado mucho dinero con tal motivo, sin que nunca se hubieran visto los resultados. Bajo la presidencia del General Antonio López de Santa Anna, que fue el gobernante conservador que más se preocu-

³³ Informes y Manifiestos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de 1821 a 1904. Tomo I, pág. 159.

pó por la codificación, fue designado el 10 de diciembre de 1841 don Manuel de la Peña y Peña, para que asistido de un letrado de su confianza, redactase un Código Civil, pero la penuria en que se encontraba el erario impidió se pagaran sus emolumentos al señor De la Peña, lo que imposibilitó a este jurista a terminar la labor que se le encomendó.³⁴

Dentro de la historia de nuestra legislación civil, destaca muy especialmente la figura de don Juan Nepomuceno RODRÍGUEZ DE SAN MIGUEL, sin duda uno de los más ilustres juristas de la época, que militó dentro del Partido Conservador. Originario de la Ciudad de Puebla, RODRÍGUEZ DE SAN MIGUEL se formó en el Colegio Nacional de Minería, de San Juan de Letrán y en la Academia de San Carlos. Cuando era aún estudiante, le hicieron miembro de la Academia de Legislación y Economía Política y catedrático de la Nacional y Pontificia Universidad de México, su inteligencia y sus conocimientos pronto lo llevaron a ocupar destacados cargos gubernamentales, entre otros tenemos, que en 1843 fue uno de los miembros de la Junta Nacional Legislativa que expidiera las llamadas "Bases Orgánicas de la República".

Autor de innumerables obras, entre las que se destacan sus "Pandectas Hispano-Mexicanas", obras indispensables para el conocimiento del Derecho en aquella época, RODRÍGUEZ DE SAN MIGUEL realizó su práctica jurídica antes de obtener el título de abogado con don Manuel de la Peña y Peña y el 14 de febrero de 1845 presentó a la Cámara de Diputados, junto con Vega y Andrade un dictamen sobre la formación de diversos Códigos, entre los que se menciona de manera especial al Civil, pues "ya autores muy antiguos clamaban por la reforma de la legislación de sus tiempos, que aún subsiste en los nuestros, y no escuchamos otra cosa más que quejas en contra de ellas", proponiendo al efecto el siguiente proyecto de Ley.

Art. 1o. Para la formación del proyecto de Código Civil y Procedimientos en el Orden Civil, se nombrará una comisión especial de tres diputados y dos senadores electos por su respectiva Cámara en escrutinio secreto. Los diputados serán precisamente de los que deban continuar funcionando en el bienio entrante.

Art. 2o. La comisión, cada quince días, contados a partir desde que se concluya el plan del referido Código, remitirá a los periódicos sus trabajos para que sobre ellos puedan hacerse por la imprenta las observaciones convenientes.

Art. 3o. A tiempo oportuno, después de vistas las observaciones hechas por la prensa, la comisión irá remitiendo esos trabajos parciales a la Cá-

³⁴ POLA, Angel. *Benito Juárez*, México.

mara de Diputados, y ésta a otra comisión, para que se hagan sobre ellos dictámenes separadamente.

Art. 4o. Estos dictámenes se presentarán por esa segunda comisión, cada tres días y también se imprimirán, mas no se pondrán a discusión, sino hasta que se haya concluido todo el Código y admita iniciativa sobre su adopción.

Art. 5o. La Comisión de que se habla en el Art. 1o. expresará por anotaciones marginales, lo que se ha introducido de nuevo y lo que se ha alterado o modificado, asimismo, procurará en general conservar la actual legislación, en todo lo que no haya poderosa razón para alterarla".³⁵

Ese mismo año de 1845, el entonces Ministro de Justicia don Mariano Riva Palacio, presentó una solicitud para que se abriera un concurso, en el que se premiara el mejor proyecto de Código Civil, el que probablemente nunca llegó a verificarse.³⁶

Nuevamente los trabajos de estas comisiones quedaron truncados por el derrocamiento de Santa Anna y la ominosa invasión norteamericana que le siguió.

Durante el último gobierno de Santa Anna (1853-1855), se comisionó de nuevo a RODRÍGUEZ DE SAN MIGUEL, para que junto con don Bernardo COUTO y don José María CUEVAS, elaboraran un Código Civil que no llegó nunca a terminarse.³⁷ En este período de Santa Anna fue cuando se promulgó el primer Código de Comercio, al que ya hemos aludido.

Inexplicablemente bajo el gobierno de Maximiliano, RODRÍGUEZ DE SAN MIGUEL no fue incluido en la comisión redactora del Código Civil del Imperio, a pesar de que el distinguido jurista poblano ocupó destacados cargos en la Regencia del Imperio, quizá la razón está en las profundas convicciones conservadoras que tenía, pues al poco de establecerse el gobierno de Maximiliano, RODRÍGUEZ DE SAN MIGUEL se retiró de la política y se dedicó en forma exclusiva al ejercicio de su profesión, hasta su fallecimiento en 1877.

Una idea de lo que hubiera sido el Código Civil Conservador que nunca llegó a expedirse, a pesar de los múltiples esfuerzos que se hicieron la encontramos en una obra de carácter enteramente privado, llamada "Redacción del Código Civil de México", realizada por el licenciado Vicente GON-

³⁵ RODRÍGUEZ DE SAN MIGUEL, Juan N. *Guía Judicial. Colección de las Leyes de más frecuente uso en la Administración de Justicia*. México, 1846.

³⁶ Este dato aparece en la *Reseña de Codificación Mexicana*. Revista El Derecho. México, 1870.

³⁷ ORTEGA Y PÉREZ GALLARDO, Ricardo. *Historia Genealógica de las Familias más Antiguas de México*. México, 1910. Folio de la Familia Sota Riva.

GONZÁLEZ CASTRO, publicada en Guadalajara, el año de 1839 y dedicada al Obispo de aquella ciudad don Diego de Aranda.

De acuerdo con las ideas conservadoras, GONZÁLEZ CASTRO se limitó a ordenar, modernizando su ortografía y redacción, las disposiciones de la antigua legislación hispana, principalmente, las Siete Partidas, la Novísima Recopilación, la Recopilación de Indias, el Derecho Canónico y algunas normas emanadas de los gobiernos mexicanos.

Al igual que el proyecto Sierra, el de GONZÁLEZ CASTRO recibe la influencia del Código de Francia a través de autores españoles. Aun cuando no lo dice, GONZÁLEZ CASTRO, para la formación de su obra, debió haberse inspirado y tomado en cuenta, la del jurista español Pedro GOROSABEL, impresa en Tolosa el año de 1832 e intitulada "Redacción del Código Civil de España".

En el prólogo de su obra, Gorosabel acepta la influencia francesa, principalmente, en lo que se refiere a sistema y redacción, pero la doctrina "...es enteramente española, pues como se ve, cada artículo va justificado con su ley o leyes que se citan al pie por nota..."³⁸ aunque tanto la legislación hispana como francesa, dice GOROSABEL, guardan grandes analogías tomadas ambas de la Romana.

La similitud entre el proyecto mexicano y el español es notoria, ambos siguen el mismo orden y están divididos en títulos, capítulos y secciones, además que GONZÁLEZ CASTRO, al igual que GOROSABEL, cita al pie de cada artículo la ley de donde se tomó aquella suposición.

La "Redacción del Código Civil de México", consta de 1,646 artículos, un título preliminar y tres libros, de los cuales el primero se intitula "Del goce y pérdida de los derechos civiles", en el cual se regula todo lo relativo al estado y capacidad de las personas, el segundo, "De los bienes y las diferentes modificaciones de la propiedad" y el tercero, "De los diferentes modos de adquirirse y transferirse la propiedad" en el cual se regula todo lo relativo a sucesiones, obligaciones y contratos.

La aplicación del Código Civil de Oaxaca de 1827 debió haber sido poco afortunada, ya que fue objeto de severas críticas tanto por juristas de ideas conservadoras como RODRÍGUEZ DE SAN MIGUEL, como por los liberales mismos, pues en una carta de 5 de abril de 1848, escrita por Juárez, siendo Gobernador de Oaxaca, al referirse a ese Código expresaba que "...no obstante de que éste contiene disposiciones, que aunque intrínsecamente buenas, muchas de ellas consideradas en relación a las costumbres y

³⁸ GOROSABEL, Pedro. *Redacción del Código Civil de España*. Imprenta de la Viuda de la Lama, Tolosa, 1832.

circunstancias peculiares del país no pueden llevarse a debido efecto, sin causar algunos perjuicios, como ya demostró la experiencia. . .” Por lo que ese mismo documento, proponía al Regente de la Corte de Justicia el restablecimiento de dicho Código, pero suprimiendo algunos artículos y aumentando otros . . . “que hagan más fácil su observancia y aplicación de los casos concurrentes”.³⁹

No es sino hasta el 10. de octubre de 1852 que aparece un nuevo Código Civil en Oaxaca, cuyo contenido desconocemos, pero lo más probable es que siga los lineamientos del anterior aunque con algunas modificaciones. Respecto de su vigencia, tenemos serias dudas, pues por Decreto del Presidente Santa Anna, de 27 de julio de 1853, el cual fue objeto de revisión por el Congreso Constituyente de 1857 durante la sesión de 12 de abril de 1856, se derogó el Decreto de la Legislatura de Oaxaca de 4 de diciembre de 1852, que sancionaba el mencionado Código que habría de observarse en todo el Estado, dejando también sin efecto los Decretos de dicha Legislatura de 3 de enero y 23 de marzo de 1853 que prorrogaban el plazo para que comenzara la vigencia de ese Código.⁴⁰

La novedad más importante introducida al campo del Derecho Civil en este período, fue el reconocimiento a inventores y perfeccionadores de procesos industriales, primeramente concediéndose privilegios a cada caso en particular y con posterioridad, el 7 de mayo de 1832, se expidió una Ley en la que se facultaba al ejecutivo a dar patentes de privilegio por diez años “...siendo ésta la primera ley en que se reconoció ya como un derecho la propiedad intelectual que antes sólo se había tenido como una gracia del soberano. La ley de que hablamos fue reglamentada en diciembre 2 de 1851 y julio 12 de 1852”.⁴¹ Por lo que se refiere a materia de codificación, aquella “sociedad fluctuante”, como acertadamente llama Reyes Heróles⁴² a este período, tuvo que esperar varios años a que llegara la paz y con ella aparecieron los primeros códigos, pues como decía RODRÍGUEZ DE SAN MIGUEL citando a BACON “...si la restauración de las leyes no se hace en tiempo más juicioso e ilustrado que los anteriores, sería bien triste que los monumentos de la sabiduría de los siglos pasados se destruyesen por los temerarios ensayos de una ignorancia presuntuosa”.⁴³

³⁹ POLA, Angel. *Benito Juárez*. México.

⁴⁰ HERNÁNDEZ, Rafael. *Índice Alfabético de la colección de Leyes y Decretos del Estado de Oaxaca*. 1902.

⁴¹ MACEDO, Miguel S. *Op. cit.*, pág. 251.

⁴² REYES HERÓLES, Jesús. *Op. cit.*, Tomo II.

⁴³ GONZÁLEZ CASTRO, Vicente. *Op. cit.*, pág. X.

BIBLIOGRAFÍA

- ALAMÁN, Lucas. *Disertaciones sobre la Historia de la República Mexicana*. México, 1844.
- BORJA MARTÍNEZ, Manuel. *Notas sobre la Historia y el Panorama de la Legislación Nacional de Propiedad y Condominio de los Edificios*. Revista de Derecho Notarial. México, 1970.
- CARRANCA Y TRUJILLO, Raúl. *La Organización Social de los Antiguos Mexicanos*. Ediciones Botas. México, 1966.
- CASAS Bartolomé de las. *Los Indios de México y Nueva España*. Editorial Porrúa, México, 1966.
- CERVANTES Y ANAYA, Javier de. *Historia del Pensamiento Jurídico en México*. Apuntes mimeográficos.
- *Colección de Decretos y Ordenes del Congreso Mexicano (1822-1823)*. México, 1825.
- Colección de Incunables Americanos*. Madrid, 1945.
- Colección de Leyes y Decretos (1687-1898)*, por DUBLÁN Y LOZANO. México, 1874-1904.
- ESQUIVEL Y ORREGÓN, Toribio. *Apuntes para la Historia del Derecho en México*. Editorial Polis, México, 1937-1948.
- GARCÍA GAYO, Alfonso. *Manual de Historia del Derecho Español*. Madrid, 1967.
- GÓMEZ PALACIO, Antonio. *Historia del Derecho Civil Mexicano*. Revista Jurídica de la Escuela Libre de Derecho, México, 1923.
- GONZÁLEZ DE COSSÍO, Francisco. *Apuntes para la Historia del Jus Puniendi en México*. México, 1963.
- GONZÁLEZ CASTRO, Vicente. *Redacción del Código Civil de México*. Imprenta de Mariano Meléndez y Muñoz, Guadalajara, 1839.
- GOROSABEL, Pedro. *Redacción del Código Civil de España*. Imprenta de la Viuda de la Lama, Tolsá, 1832.
- HERNÁNDEZ, Rafael. *Índice Alfabético de la Colección de Leyes y Decretos del Estado de Oaxaca*. Oaxaca, 1902.
- Informes y Manifiestos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de 1801 a 1904*. México, 1904.
- KOHLER, José. *El Derecho de los Aztecas*. Edición de la Revista Jurídica de la Escuela Libre de Derecho. México, 1924.
- MACEDO, Miguel S. *Apuntes para la Historia del Derecho Penal Mexicano*. Editorial Cultura, México, 1931.
- MACEDO, Pablo. *Evolución del Derecho Civil. Evolución del Derecho Mexicano*. Editorial Jus, México, 1943.
- MATEOS ALARCÓN, Manuel. *Evolución del Derecho Civil Mexicano*. México, 1911.
- MINGUIJÓN, Adrián Salvador. *Historia del Derecho Español*. Editorial Labor, España, 1953.
- O'GORMAN, Edmundo. *Supervivencia Política Novo Hispano*. Fundación Cultural de Condumex, México, 1969.
- ORTEGA Y PÉREZ GALLARDO, Ricardo. *Historia Genealógica de las Familias más Antiguas de México*. México, 1910.
- OTS-CAPDEQUÍ, José María. *Manual de Historia del Derecho Español en Indias*. Instituto de Historia del Derecho Argentino, Buenos Aires, 1943.

- OTS CAPDEQUÍ, José María. *El Estado Español en Indias*. Fondo de Cultura Económica, México, 1965.
- POLA, Angel. *Benito Juárez*. México.
- REYES HERÓLES, Jesús. *El Liberalismo Mexicano*. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1958.
- RODRÍGUEZ DE SAN MIGUEL, Juan N. *Guía Judicial*. México, 1846.
- RODRÍGUEZ DE SAN MIGUEL, Juan N. *Pandectas Hispano-Mexicanas*. México, 1912.
- VASCONCELOS, José. *Breve Historia de México*. Compañía Editora Nacional, México, 1966.
- WILSON, Baronesa de. *México y sus Gobernantes de 1519 a 1910*. Editora Nacional, México, 1967.
- ZARCO, Francisco. *Historia del Congreso Constituyente*. México, 1956.